

*Antecedentes políticos: la primavera de 1936**

Santos Juliá

En la desapacible mañana del 16 de febrero de 1936, los españoles salían a la calle, por tercera vez en menos de cinco años, para elegir una nueva Cámara legislativa. Como en las municipales de abril de 1931, los términos de la elección aparecían también ahora nítidos y excluyentes: si entonces era preciso optar por Monarquía o República, ahora la batalla se planteaba entre derechas e izquierdas, y eran muy pocos quienes se disponían a malgastar su voto en alguna opción ajena a las dos grandes coaliciones electorales. Frente Popular llamaban a la de izquierdas, mientras que las derechas, incapaces de encontrar un nombre que identificara su dispar composición y sus contradictorios proyectos, se inclinaron finalmente por el de Frente de la Contrarrevolución.

La voz *frente* entraña profundas connotaciones bélicas e indica gran resolución en la toma de decisiones. Nada de extraño, pues, que testigos e historiadores hayan convertido las elecciones de 1936, por la presencia de dos frentes, en prólogo de una guerra. Según una versión muy extendida, y a pesar de que sólo pudieran contarse en aquel día de febrero leves incidencias, la sociedad española, también dividida en dos, iba camino de precipitarse de forma ineluctable por el despeñadero de la lucha fratricida. Sin embargo, *frente* significa también fachada; y mucho de eso hubo en aquellas dos coaliciones políticas que cubrieron edificios enteros con carteles —cuyas grandes palabras ocultaban elementos dispares y aun contradictorios—, sólo circunstancialmente coligadas por una simple necesidad electoral.

* Fascículo publicado en Edward Malefakis, ed., *La Guerra de España*, Madrid, El País, 1986, y con ligeras revisiones en la edición de Taurus, 1996.

Más que la seguridad de un destino inevitable, la presencia de los dos frentes abría la incertidumbre derivada de la imposibilidad de que nadie en aquellas elecciones podía resultar vencedor: ningún partido presentaba candidatos suficientes para obtener mayoría absoluta. El triunfador, cualquiera que fuese, se vería obligado a gobernar con la asistencia de otros partidos, que en ningún caso podía ser firme, ya que en el seno de cada coalición el principal aliado podía convertirse en el primer adversario. La fracción mayoritaria del socialismo aspiraba al poder por agotamiento de sus aliados, los republicanos, mientras los monárquicos consideraban imprescindible para su avance el fracaso de los católicos de la CEDA, principal partido del frente contrarrevolucionario. La incertidumbre del futuro se alimentaba, por tanto, de la fragmentación que afectaba a las dos coaliciones, cuyo resultado inmediato sería la debilidad radical de cualquier posible vencedor.

Incertidumbre, fragmentación, debilidad: todo habla de indeterminación. El carácter de inevitabilidad de la guerra, de ineluctable descenso hacia el abismo que impregna la historiografía posterior, oculta que existían —y así era sentido entonces por gran parte de españoles— otros caminos para resolver las tensiones de la época. Que fuera finalmente la guerra el camino recorrido no se debió a un destino fatal, sino a decisiones tomadas positivamente por instituciones y fuerzas sociales que es preciso llamar por su nombre. Lo ocurrido en la primavera de 1936 fue el antecedente cronológico de la guerra, pero pudo haberlo sido de otras muchas cosas si la fuerza vigilante de un amplio sector del Ejército no se hubiera alzado en armas contra la República.

FRENTE POPULAR

Partidos republicanos y sindicatos obreros tenían ya a sus espaldas, cuando comenzaba 1936, una historia que los empujaba al entendimiento por encima de sus continuas divisiones y lejanías. En 1930, cuando los republicanos conspiraban para derrocar a la Monarquía, su preocupación fundamental — además de asegurarse, como todos los conspiradores que en España han sido, las llamadas asistencias militares— consistía en ganarse el apoyo de los sindicatos. Explícito, con objetivos claros, si se trataba de la UGT, socialista; tácito, limitado a garantizar su benevolencia, si de la CNT, arnacosindicalista. En España no había posibilidad de un gobierno de izquierdas si los partidos

republicanos y las organizaciones obreras se daban la espalda o andaban a la greña.

La eficacia política del pacto entre partidos republicanos y sindicatos obreros venía asegurada por la presencia en la coalición de un partido que en 1930 era simultáneamente republicano y obrero: el PSOE. Partido Socialista, UGT y partidos republicanos formaron así una poderosa conjunción cuyo carácter popular radicaba en sus componentes obrero y pequeño patronal, mientras que su carácter reformador procedía del republicanismo y de quienes dentro del socialismo se identificaban ante todo como liberales o demócratas. En esta coalición popular y reformadora y en el gobierno republicano-socialista que fue su expresión política tuvo su primer asiento la II República Española.

La amplitud de la coalición quedó seriamente dañada, primero por el abandono de la derecha republicana con ocasión del debate sobre la cuestión religiosa y después, por la salida, en diciembre de 1931, del Partido Republicano Radical, que aspiraba a presidir un gobierno del que hubieran salido los socialistas. Desde principios de 1932 la coalición republicano-socialista quedó reducida, pues, al PSOE –siempre con el apoyo de la UGT- y a los partidos republicanos de izquierda, Acción Republicana, Partido Radical-Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya y Organización Republicana Gallega Autónoma. Era, a todos los efectos, una coalición de izquierdas, aunque sometida a una continua erosión por parte del sindicalismo anarquista.

Sin el apoyo de los pequeños patronos y con la hostilidad de un sector de la clase obrera, la coalición no pudo aguantar en pie ante la reacción de los intereses tradicionales afectados por su política de reformas, especialmente los militares, la Iglesia y los propietarios de tierra. En la crisis del verano de 1933, socialistas y republicanos rompieron su alianza y acudieron en solitario, como pidiendo derrota, a las urnas. Fueron derrotados. Los socialistas pretendieron entonces recuperar por su cuenta el terreno cedido a las derechas antirrepublicanas saltando al vacío con la insurrección de octubre de 1934: volvieron a ser derrotados. A principios de 1935 eran muchos los que, encabezados por Indalecio Prieto, pretendían reconstruir los puentes rotos con el republicanismo, con objeto de paliar los desastrosos efectos políticos de las sucesivas derrotas.

El doble fracaso de 1933 y 1934 no cambió, sin embargo, la perspectiva general de los dirigentes de la UGT, sobre todo de Largo Caballero y de lo que comenzó a llamarse izquierda socialista, en lo que se refería a posibles compromisos de Gobierno con los republicanos. Escaldados tras la experiencia del primer bienio, los socialistas de izquierda se mostraron durante todo el año de 1935 reacios a la reconstrucción de una coalición de izquierdas con los republicanos, tal como pretendían Manuel Azaña, dirigente del nuevo partido de Izquierda Republicana, e Indalecio Prieto, socialista pero inclinado desde siempre al pacto con los republicanos. Sólo la cercanía de la crisis de la coalición radical-cedista y la inminencia de una nueva convocatoria electoral, movió a Largo Caballero a salir de su política de aislamiento aunque con una condición: la coalición de izquierdas sería *circunstancial*, limitada a las elecciones. Una vez recuperada la República para las izquierdas, debían gobernar solos los republicanos, llevar a cabo la parte del programa que a ellos correspondía y, culminada su obra, dejar paso libre a un Gobierno exclusivamente obrero.

Gobierno obrero, no gobierno de coalición republicano-socialista: la diferencia no es baladí, porque de la insistencia en el carácter específicamente obrero de la presencia socialista se derivó hacia finales de 1935 una profunda transformación de la naturaleza de su tradicional coalición con los republicanos. Por una parte, para remachar el carácter obrero de la coalición los dirigentes de la UGT forzaron la entrada en el pacto de otros partidos obreros tradicionalmente hostiles a las alianzas interclasistas, como, sobre todo, los comunistas, que desde 1935 habían dado un giro espectacular a su política y defendían la coalición con los republicanos bajo el nombre de Frente Popular. Por otra, al rechazar todo compromiso de futuro gobierno y romper la línea continua entre socialismo y republicanismo liquidaban el papel que desde siempre correspondía al PSOE en el interior de la coalición. De hecho, a partir de diciembre de 1935, el PSOE apareció dividido en dos facciones enfrentadas en una lucha por la dirección de la política a seguir.

A la anulación del socialismo como único eje posible de una coalición obrero-republicana se añadió la presencia comunista, que con un número no despreciable de votos y de capacidad movilizadora, especialmente entre las juventudes, añadía también al Frente Popular una complejidad no pequeña. Los comunistas llegaban a 1936 profundamente divididos entre quienes obedecían a

la Tercera Internacional —el PCE— y quienes, por juzgarla traidora a sus orígenes, la situaban entre sus principales adversarios, o sea, el POUM. El lado obrero de la coalición se completó con la firma del pacto por las Juventudes Socialistas —muy reacias en un primer momento a la coalición con los republicanos— y por un pequeño Partido Sindicalista creado por Ángel Pestaña tras su escisión de la CNT.

Las divisiones políticas del sector obrero del Frente Popular contrastaban en enero de 1936 con la claridad y el entendimiento que reinaba en el sector republicano. Era el mundo al revés: antes, los republicanos se debatían en multitud de partidos, mientras sus aliados obreros ofrecían la imagen sólida de su pertenencia a ese sindicato-partido que era la UGT-PSOE. Ahora, sin embargo, eran los republicanos quienes habían reducido su anterior abigarramiento y se presentaban en sólo dos partidos de militancia acrecida que mantenían, además, relaciones muy fluidas y sin problemas graves entre ellos.

Que el panorama republicano se encontrase despejado era obra personal de Manuel Azaña. Al perder las elecciones de 1933 y quedar convertido, como él mismo decía, en nada, Azaña despertó a la realidad de que en una democracia no se puede gobernar sin un partido político fuerte. Este dato elemental no había sido evidente para él en 1931 precisamente porque en aquella singular circunstancia debió la jefatura del Gobierno al hecho de ser jefe de un pequeño partido. Después de las elecciones eso ya no sería posible de nuevo, así que decidió crear un partido más sólido y procedió a la fusión del suyo propio con un sector del radical-socialismo y con los republicanos gallegos. Izquierda Republicana estableció pronto relaciones políticas con otro partido republicano creado en 1934 por Martínez Barrio, al unir a los descontentos del Partido Radical con el otro sector del radical-socialismo y fundar Unión Republicana. Izquierda y Unión, con el refuerzo de un grupo de notables reunidos en torno a Felipe Sánchez Román, llegaron pronto a formar una *inteligencia republicana* bajo la indiscutible autoridad de Manuel Azaña.

A la acción unificadora del republicanismo, Azaña había añadido la dirección de un movimiento por el rescate de la República que concentró, avanzado ya 1935, a masas de oyentes en grandes estadios y que culminó en Comillas, un descampado a las afueras de Madrid en el que se reunieron cerca de medio millón de personas a escuchar su palabra. Su autoridad entre los

republicanos y su nuevo atractivo ante los partidos y sindicatos obreros se convirtió pronto en un significativo capital político. En enero de 1936 Azaña reconstruyó la coalición de izquierdas a su medida: obtuvo para el republicanismo un total de candidatos superior al de todos los partidos obreros; logró que el programa de la coalición fuera el republicano, que la responsabilidad del Gobierno recayese en sus manos y no permitió que el pacto fuese elaborado por nadie más que por el PSOE y por ellos, aunque aceptó que los socialistas llevasen al pacto todas las firmas que quisieran si eso no se hacía con menoscabo de la hegemonía republicana. En una palabra, cumplió la consigna que tuvo ocasión de recordar en uno de sus discursos: todos los enemigos al frente, ninguno a la espalda o en los flancos. Fue su mejor momento.

Tan lo fue, que incluso los anarquistas callaron la boca. El fenómeno tiene su importancia no sólo por insólito, sino porque aseguraba a la coalición la totalidad del voto obrero. A principios de 1936, una CNT de nuevo resurgida contemplaba el retorno de los escindidos y apaciguaba sus querellas internas. Contaba quizá con medio millón de afiliados, pero podía movilizar cuatro veces esa cifra. Mantenía su fuerza tradicional en Cataluña y Andalucía, pero había crecido en Madrid y en otras capitales. Su limitada participación en los hechos de octubre de 1934 le había salvado del bochorno pero no de la mala conciencia, así que en la coyuntura presente, y tras algunas habilidades semánticas, prefirió recomendar a sus militantes que fueran a las urnas con objeto de poner en la calle a los represaliados de aquel octubre.

No podía darse quizá un conjunto de factores que garantizase a las izquierdas un mayor número de votos. Que el Gobierno que se formase después estuviera integrado sólo por republicanos calmaba las inquietudes de las clases medias y de la burguesía liberal; que los socialistas aceptaran el pacto haciendo constar todo lo que los alejaba de los republicanos aseguraba el voto de un importante sector de la clase obrera y de la campesina; que los anarcosindicalistas recomendasen, aunque fuera con la boca pequeña, el voto reduciría en favor de la izquierda los márgenes de la abstención. Para que nada faltase, la presencia de los comunistas potenciaría la movilización y el entusiasmo de las juventudes, muy radicalizadas, en defensa de las candidaturas.

Se comprende que ese conjunto de factores constituyese también motivo de incertidumbre para el futuro. Era una coalición perfecta para triunfar en unas elecciones, pero problemática como instrumento de gobierno. Cada cual iba a depositar en las urnas no ya distintas expectativas, sino objetivos dispares e incluso enfrentados: recuperar la República para acelerar las reformas no era lo mismo que implantar el socialismo, y esto tenía poco que ver con revolución social tal como la entendía un anarquista. El continuo popular-reformador de 1931 no pasaba de ser ahora una alianza circunstancial obrera y republicana recorrida por varias líneas de fractura.

FRENTE DE LA CONTRARREVOLUCIÓN

Si se creen los recuerdos de su principal dirigente, José María Gil Robles, por el lado de la derecha el panorama era simplemente caótico. Buena parte del caos había que atribuirlo al pasmo, primero, y a la no disimulada rabia, después, que le entró a Gil Robles cuando en la crisis de diciembre de 1935 Alcalá Zamora no le encargó la presidencia del Consejo, a la que el líder del partido católico aspiraba no exactamente para gobernar –no habría contado con mayoría- sino para disolver las Cortes y presidir las inmediatas elecciones. De momento, toda su famosa *táctica*, -apoyar a Lerroux, colaborar con Lerroux, sustituir a Lerroux, todo por medios legales- que tantas invectivas le había valido de los sectores de la derecha monárquica y subversiva, entraba en cuarentena en el preciso momento en que se disponía a recoger su fruto máspreciado: la cabecera del banco azul.

Por la táctica había sacrificado Gil Robles sus juveniles impulsos y atemperado el paso al ritmo que le aconsejaban experimentados y clericales mentores; por la táctica había también abrazado efusivamente a Lerroux y entrado en tratos con los republicanos más corruptos y desprestigiados a quienes en el fondo también él despreciaba. Se entiende su excitación cuando a raíz de los escándalos del estraperlo y de Nombela, los radicales de Lerroux se deshicieron como un azucarillo y le dejaron el camino expedito para llegar a la meta de su táctica. No pensó nunca que Alcalá Zamora le cerraría el paso e intentaría una maniobra en el mejor estilo de la vieja política: lanzar desde la presidencia de la República su propio partido y dar a Portela Valladares, con el Gobierno, el decreto de disolución. No se lo quería creer Gil Robles, y en su

rabia llegó a animar al general Fanjul para que sondeara los ánimos de otros generales —entre ellos Franco— por si creían oportuno declarar, contra el presidente, la ley marcial. Fanjul estaba ya lanzado a la operación e incluso pretendió proceder por su cuenta, pero la frialdad de Franco lo contuvo: no estaban aún las condiciones maduras, razonaría luego el militar, convertido ya en generalísimo.

Desechado el golpe militar, y con el ánimo algo más sereno, Gil Robles se encontró en una situación envidiable para conquistar el banco azul y reivindicar la bondad de su táctica, ya que, hundidos los radicales, sólo la CEDA quedaba como gran partido de la derecha. Con una sólida base en el mundo de los pequeños y medianos propietarios agrícolas y en las clases medias urbanas de creencias católicas, con una organización moderna, de masas, y haciendo un uso muy eficaz de las técnicas de movilización y propaganda, con movimientos de mujeres y de jóvenes muy activos, la CEDA contaba con llevar al Parlamento un sustancial puñado de diputados que pondría el Gobierno en sus manos. Pretendía la organización política de los católicos españoles no ya *rectificar* la República, como habían querido sus aliados de la víspera, sino proceder a la *reforma constitucional* que conduciría a un régimen católico, centralista, corporativo y autoritario. No era la CEDA una formación estrictamente fascista, ya que rebosaba catolicismo e incluso clericalismo para serlo, pero en su simbología y en su lenguaje, así como en los uniformes y en los lenguajes de sus juventudes, hacía todo lo posible por parecerlo. Ramiro Ledesma Ramos tenía razón cuando atribuía el escaso crecimiento de Falange y la ausencia de un auténtico partido fascista en España al alto grado de *fascistización* de los partidos católico y monárquico.

Debido a su posición hegemónica dentro de la derecha, la CEDA se sintió inmediatamente blanco de todas las miradas y de todos los apetitos. Con el sistema electoral de la República, todos los partidos que no hubieran entrado en el Frente Popular —o en su equivalente Front d'Esquerres de Catalunya— debían acudir a la CEDA si querían obtener el acta de diputado. Al pasmo y a la rabia de Gil Robles siguió inmediatamente la excitación provocada por el continuo “ajetreo de visitas” que, según *El Debate*, pasaban por su despacho. Gil Robles no cerró sus puertas a ninguna de esas visitas y pudo así recibir consejos y atender peticiones de personajes tan manifiestamente republicanos como

Maura o tan inequívocamente antirrepublicanos como Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera. Tuvo, pues, en sus manos la posibilidad de optar por la formación de una coalición republicana de centro derecha que abarcase desde los partidos de Portela, Alcalá Zamora, Maura, Melquiades Álvarez y los nacionalistas vasco y catalán de derecha, hasta la propia CEDA, o por la constitución de un frente con los partidos antirrepublicanos —monárquicos y fascistas—. Cualquiera de estos acuerdos era posible y tenía sus defensores. De cualquiera de ellos habría salido un compromiso claro, un programa sobre bases comunes, una dirección aceptada por todos y seguramente un comité con autoridad para elaborar candidaturas en todas las circunscripciones.

Pero una opción de ese tipo habría exigido de la CEDA una decisión que sistemáticamente venía posponiendo desde su formación: terminar con la ambigüedad respecto al régimen republicano y declarar expresamente sus intenciones finales. No lo hizo, pero no era inevitable que no lo hiciese. El hecho de que la CEDA no construyera una alternativa política clara de derechas —republicana o no— y aglutinara en torno a ella a otras fuerzas políticas en un frente común fue resultado de una decisión tomada por su principal dirigente, que al no cerrar las puertas a ninguna de sus visitas pretendió llegar a un acuerdo separado con cada una de ellas. José María Gil Robles actuaba, en efecto, convencido de la seguridad de su triunfo y guiado por el propósito de consolidar la posición hegemónica que ya ocupaba su partido en el conjunto de la derecha. Pero por mucha que fuese la flexibilidad y sutileza del llamado catolicismo político no eran bastantes para aglutinar lo irreconciliable. Por decirlo con dos apellidos ilustres, Calvo Sotelo y Maura no podían suscribir un mismo documento, ni obedecer a un mismo comité electoral, ni formar parte de una misma candidatura. Si Gil Robles pretendía llegar a un acuerdo con ambos —y con Cambó, y Portela, y Fal Conde, y Primo de Rivera, entre otros— tenía que renunciar a declaraciones de principios, a programas de Gobierno y a listas únicas de candidatos para todas las circunscripciones. Y eso fue, en definitiva, lo que hizo: rechazó los puntos que le presentaba Calvo Sotelo —entre otros colocar a un general en la presidencia de la República— pero sin poder sustituir su programa por ningún otro.

Así, en lugar de un bloque o frente de derechas se prefirió la creación de tantos bloques como circunscripciones: en unas se presentaba la CEDA al lado

de los monárquicos, divididos éstos también en alfonsinos y carlistas; en otras, los monárquicos dejaban los puestos a los diversos partidos republicanos de derechas; y todavía en otras se presentaban dos candidaturas opuestas a las del Frente Popular: una que iba de la derecha a la extrema derecha y otra que en sentido opuesto llegaba hasta el centro. Nadie tenía autoridad sobre aquella confusión. Nadie podía aventurar, por tanto, qué pasaría con una coalición tan disparatada en el caso de triunfo, pues todos habían tenido el buen cuidado de aclarar que entre ellos no existía acuerdo alguno de gobierno. Seguramente sería inevitable un periodo de fuerte inestabilidad, porque tras las continuas cesiones a derecha e izquierda y tras atender a tantísima visita, los candidatos finalmente presentados por la CEDA no daban para garantizar una mayoría parlamentaria. No hay quizá mejor signo de la distancia entre la fachada —el frente— y lo que ocultaba que esos cartelones con enunciados de imposible cumplimiento: «¡A por los 300! ¡Todo el poder para el jefe!», pues ni eran 300 los candidatos de la CEDA ni tenía el jefe poder sobre sus propios aliados.

SITUACIÓN REVOLUCIONARIA

Entre los distintos partidos de izquierda y de derecha existían, pues, distancias profundas que afectaban no ya a un programa político ni a unos propósitos de gobierno, sino a verdaderos sistemas de creencias. El rápido y masivo acceso de grandes sectores sociales a la práctica política que acompañó a la proclamación de la República se insertó en la comunión, ferviente a veces y otras sencillamente fanática, con visiones del mundo y con proyectos de futuras sociedades cerrados a la posibilidad de discusión y crítica políticas. Cristalizaron así varios sistemas de creencias en torno al Estado, al poder, a la sociedad y a la historia —anarcosindicalismo, comunismo, socialismo revolucionario, republicanismo, catolicismo como política, monarquismo, carlismo, fascismo—, caracterizados por la certeza colectiva de poseer una verdad total y por la apremiante necesidad de llevarla a la práctica.

Sólo el sistema electoral pudo lograr que esas diferencias se borrasen, siquiera por un día, y que aquella mañana de febrero se impusiera la disciplina de voto: los socialistas, incluso si alardeaban de revolucionarios, votaron por Azaña, sólo meses antes despreciado, mientras los monárquicos votaban a su odiado Gil Robles. Es vano el empeño de saber qué partido fue el más votado. La

imposibilidad física, material, de desagregar los votos obtenidos por cada coalición convierte en arbitraria manipulación de datos cualquier intento de atribuir porcentajes o números absolutos a los distintos partidos coligados. No hay manera, pues, de saber si, entre los electores de la coalición de izquierda, los votantes se inclinaron más por los marxistas que por los republicanos, o, en la derecha, más por la CEDA que por algunos de sus ocasionales aliados: en un sistema de lista, aunque fuera abierta, las diferencias entre el más y el menos votado suelen ser estadísticamente irrelevantes; lo que importaba para el resultado final era el número de candidatos de cada partido incluidos en la lista. Pero sí puede llegar a saberse un dato elemental, oculto a veces en la maraña de interpretaciones: triunfó la coalición de izquierdas. La ley electoral, que primaba a las mayorías, convirtió en holgado un triunfo que según todos los indicios fue, por número de votos, muy estrecho.

Al conocerse los primeros resultados comenzaron a dispararse sin dilación todas las expectativas acumuladas desde el inicio de la campaña electoral. Para los obreros y campesinos, con independencia de su afiliación sindical, ganar a la derecha significaba liberar a los presos por la insurrección de octubre de 1934 y readmitir a los “seleccionados” con motivo de su participación en aquella huelga general. Se produjeron, pues, marchas hacia las cárceles con objeto de poner en la calle a los presos, y concentraciones ante obras y talleres para obligar a la readmisión de los despedidos. Al mismo tiempo, los Ayuntamientos destituidos en 1934 y regidos desde entonces por comisiones gestoras eran repuestos entre aclamaciones populares; en ocasiones, alcaldes y concejales pasaban directamente de la cárcel al balcón de su Ayuntamiento para saludar a unas multitudes que con su presencia en la calle pretendían convertir un triunfo electoral en una nueva situación política.

Relaciones sociales trastocadas, vueltas del revés y autoridad política hundida e incapaz de manejar los resortes de la represión: eso es lo que simboliza la liberación de presos, la readmisión de despedidos y la reposición de ayuntamientos. Igual que en 1931, y como secuela inmediata del mismo fenómeno —el triunfo en unas elecciones—, se produjo también en 1936 la situación característica de todos los inicios de revolución, con la diferencia de que ahora afectaba también a las relaciones de clases y no sólo al sistema de la política: surgía un poder distinto —en 1931 un poder popular, en 1936 un poder

obrero y campesino— ante la abdicación y el derrumbe del poder oficial. Esta aparición de doble poder es características de las situaciones revolucionarias. Las derechas no se equivocaban, y los cronistas de la época no dejaron de percibirlo: la mirada de los obreros y campesinos no era ya la misma que en 1931. Algo estaba subvirtiendo el tradicional orden de dominación establecido en la sociedad española y que la República no había sido capaz de reformar.

Esta situación revolucionaria del 16 y 17 de febrero es la que los dirigentes políticos de la coalición de derechas intentaron cerrar apoyados en dos notorios generales —Franco y Goded— e incitando a Manuel Portela, presidente del Consejo de Ministros, a declarar el estado de guerra, incluso contra la manifiesta voluntad del presidente de la República. No era la primera vez que Gil Robles acudía directa o indirectamente a Franco, pero fue la primera que Franco salió de su reserva natural. La rápida intervención de Núñez de Prado y sobre todo de Sebastián Pozas, que amenazó con oponer la Guardia Civil a lo que calificó como *militarada*, detuvo los movimientos de Franco, aunque no los de Gil Robles y Calvo Sotelo, que presionaron hasta última hora ante Portela para que declarase el estado de guerra.

AZAÑA, OTRA VEZ

Sin embargo, no fueron los militares en mal de insurrección ni la derecha conspiradora los que resolvieron aquella situación revolucionaria, sino Azaña, principal artífice del triunfo electoral de la izquierda. Desbordado, como se sentía, por las manifestaciones obreras; abandonado por los gobernadores civiles, que no contestaban al teléfono, y sin ceder a las presiones de la derecha política y militar, Portela no tenía más salida que la dimisión, aunque por paradojas de la historia la decisión que más le honra es la que se ha convertido en razón de su vituperio. ¿Qué podía realmente hacer en aquella circunstancia sino exigir —el 18 de febrero— de Manuel Azaña que se hiciera cargo del Gobierno y que abandonara su ilusorio empeño de cumplir los plazos establecidos por la ley? No era precisamente la ley lo que entonces regía y, por otra parte, el presidente de la República tenía atribuciones para nombrar un nuevo presidente de Gobierno antes de que las Cortes se constituyeran y comenzara la nueva legislatura.

Que la situación revolucionaria era sólo un comienzo o quizá un efímero estado de ánimo colectivo lo prueba bien el hecho de que bastó la presencia de Azaña en la presidencia y su voz en la radio para encontrar una salida política dentro de la legalidad constitucional. Maestro experimentado en el arte de imponer la fuerza de su palabra sobre las manifestaciones multitudinarias, Azaña volvió a salir a los balcones de la Puerta del Sol con la seguridad de que, tras oírle, cada mochuelo —como decía— volvería a su olivo, e incluso se permitía ironizar condescendentemente acerca del nerviosismo de quienes, más novatos, pretendían echar los guardias a la multitud. Pero también se apresuró a tomar algunas medidas que restauraran las heridas de lo que él llamaba «muchedumbre hambreada».

De ahí que pusiera a la Diputación Permanente de las Cortes ante la necesidad urgente de legalizar, por medio de una amnistía, lo que los manifestantes conseguían por su presencia física, o sea, la liberación de los presos. De ahí también que en menos de 10 días tuviera listo y publicado el decreto sobre readmisiones e indemnizaciones, que provocó la consternación de las agrupaciones patronales. Esas medidas se complementaron con las llamadas a los responsables de los sindicatos obreros para que pusieran fin a las manifestaciones y carreras espontáneas y convocaran una gran manifestación, que sería a la vez celebración del triunfo y apoyo al Gobierno, para el Primero de Mayo. El pueblo saldría a la calle, pero lo haría por última vez y encuadrado en sus organizaciones. Idéntico sentido tuvo la prohibición de la manifestación nacional de campesinos que se había convocado para el 15 de marzo y la urgente legalización de las ocupaciones de tierras, que llegaron a su punto máximo con la toma sincronizada de unas 60.000 hectáreas por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) en Badajoz el 25 de marzo. Las tensiones entre Madrid y Barcelona se disolvieron por la devolución a la Generalitat del Estatuto que había quedado en suspenso desde 1934.

Azaña trató de apaciguar a la derecha moderada afirmando que la única y exclusiva autoridad de la República era el Gobierno por él presidido, que no aceptaría ninguna norma exterior a su propia legalidad. Evidentemente, lo que pretendía decir, y así fue entendido, era que el Gobierno no se sentía instrumento del Frente Popular, al que por lo demás negaba cualquier relevancia política. No dejó pasar mucho tiempo sin complementar sus

aperturas hacia el partido católico —y a su dirigente Manuel Giménez Fernández, a quien advertía que el verdadero conservador era él— con algunas medidas disciplinarias hacia la extrema derecha militar y fascista. El mantenimiento del estado de alarma durante toda la primavera le permitió proceder contra Falange Española —que comenzó su racha de atentados apuntando bien alto: al vicepresidente de las Cortes y al magistrado que dictó las condenas por este atentado—, declarándola ilegal y llevando a sus jefes a la cárcel. Por otra parte, alejó de Madrid a los militares más notoriamente conspiradores, retirándoles el mando de tropas y situándolos al frente de comandancias militares.

Sin duda, se continuaba hablando de revolución y contrarrevolución y podía oírse en el Congreso de los Diputados, o en grandes mítines a cielo abierto, el discurso ya claramente subversivo de Calvo Sotelo o encendidamente revolucionario de Largo Caballero. Permanecía la tensión en la calle, menudeaban los asaltos e incendios. No pasaba día sin que algún gremio o industria declarase una huelga parcial o general y eran frecuentes los conflictos rurales. Pero si todo esto es cierto, también lo es que la presencia de Azaña al frente del Gobierno recompuso la autoridad antes abandonada y echó las bases sobre las que en medio de las tensiones era posible edificar un nuevo clima de concordia. Su discurso del 3 de abril, conciliador e impregnado de profunda emoción, produjo efectos políticos que llegaron hasta la Bolsa de Madrid. Desde José Díaz a Manuel Giménez Fernández todos corrieron a felicitarle y todos parecieron de acuerdo en que la República estaba en la mejor de las manos y había emprendido el mejor de los caminos posibles.

No es ajeno a este clima que junto con las huelgas se sucedieran, desde principios de marzo y en localidades muy conflictivas, acuerdos de negociación entre autoridades civiles, organizaciones patronales y sindicatos obreros para encontrar solución a los problemas pendientes, y sobre todo al del paro, que había sido la raíz de buena parte de las luchas sociales de años anteriores. Las sociedades anónimas, especialmente las financieras, comenzaron a publicar los resultados del ejercicio anterior, mostrando su confianza en que lo peor de la crisis económica ya había pasado. El pleno del Consejo Superior Bancario registró con agrado la vuelta a la normalidad en el movimiento de fondos de sus clientes y acordó el 11 de marzo visitar a Azaña para «reiterarle una vez más la

adhesión plena de la banca» y manifestarle que «se encontraba incondicionalmente al lado del Gobierno». No eran palabras vanas: al vencimiento de 500 millones de *tesoros* sólo se solicitó el reembolso de 67, cubiertos en unas horas por la banca, que cubrió también una nueva emisión. Las sociedades patronales, obligadas a soportar una de las medidas más duras tomadas en toda la República —el decreto de indemnización a los obreros *seleccionados* de octubre—, recomendaron obediencia a sus afiliados, aunque anunciaron acciones legales para minimizar sus efectos. Incluso la Iglesia, identificada con la coalición de derechas en las recientes elecciones, mostró en más de una ocasión su respeto por la legalidad republicana, lo que no impidió, sin embargo, que muchos fieles y no pocos obispos y sacerdotes suspirasen por una solución de fuerza que pusiera fin a las agresiones de que eran objeto sus templos y propiedades. Por lo demás, la gente no dejó de divertirse a pesar de una lluvia persistente: todos coinciden al señalar la abundancia de forasteros en la Semana Santa y en la feria de Sevilla —a la que, por cierto, concurrieron varios centenares más de cabezas de ganado que el año anterior— y es célebre el éxito de *Morena Clara* en unos cines llenos a rebosar de un público entusiasta.

Sería vano pretender que todo iba bien en el mejor de los mundos, como podría deducirse de las notas de viaje del embajador norteamericano, pero lo visto y reseñado por Bowers —paz en los campos del Sur— era tan verdad como lo denunciado cada día por Calvo Sotelo y *ABC* —desórdenes en los campos del Sur—. Ambos tenían razón: el Gobierno republicano había emprendido la obra de reconstrucción de la autoridad civil en un clima lleno de tensiones. Se puede insistir en los resultados de la reconstrucción o en los estallidos de la tensión, y se dará una imagen parcial y falsa de aquellas semanas. La peor es la que pretende extender a toda la sociedad española y a toda la primavera una radical polarización como si realmente la sociedad se hubiera escindido según una sola línea divisoria. Quienes aducen el discurso fascista de Calvo Sotelo y el revolucionario de Largo Caballero como prueba de una ascensión a los extremos pierden de vista que ni Calvo Sotelo tenía mayoría en la derecha ni Largo la tenía en las filas obreras. En todo caso, si es cierto el proceso de recuperación de la autoridad, también lo es que al finalizar abril se habían producido en el interior de las coaliciones electorales desplazamientos a veces profundos, cuyo

resultado global fue la reaparición de un alto sentimiento de inseguridad, que se agravaría durante todo el mes de mayo.

DIVISIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Para empezar, como antes, por las izquierdas, las novedades más notables respecto a sus posiciones de febrero podrían reducirse a estas cuatro: una fuerte movilización reivindicativa sindical, el agravamiento de la escisión socialista, la unificación de las juventudes socialistas y comunistas bajo la dirección política del Partido Comunista y, en fin, la creciente debilidad del Gobierno republicano por la operación sustitutoria del presidente de la República. Estos cuatro procesos tuvieron lugar en el marco de la anulación de hecho del Frente Popular como instrumento político. No influyó nada el Frente Popular en la composición del Gobierno, exclusivamente republicano; tampoco actuó como fuerza parlamentaria, ya que las decisiones en este ámbito eran competencia de las minorías; no fue, en fin, inspirador ni guía de las luchas obreras, dirigidas como siempre por los dos grandes sindicatos. El resultado final fue que los cuatro procesos señalados acontecieron sin que existiese una dirección política capaz de señalarles objetivos concretos. La izquierda que había triunfado en las elecciones dejó de existir como tal. Su lugar lo ocuparon partidos y sindicatos con graves problemas internos.

Precisamente, la fractura más seria se produjo entre sindicatos y partidos. Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que a los patronos debieron parecerles desorbitadas como, por ejemplo, la jornada de 36 horas en Sevilla. La resistencia patronal a las nuevas demandas obreras produjo el movimiento de huelgas más duro y generalizado de los habidos hasta entonces. En los meses de mayo y junio fue raro el oficio y la industria que llegase a un acuerdo sobre bases de trabajo sin una previa declaración de huelga.

Por supuesto, en el curso de estas huelgas, declaradas muchas veces por la CNT y UGT unidas, se hablaba de revolución, y no faltaban quienes la dieran ya por realizada, como los anarcosindicalistas, que discutieron en su congreso de Zaragoza la organización de la nueva sociedad libertaria. En la tradición sindical española la huelga general se sentía como pórtico de la revolución, y en

muchas capitales se sucedían huelgas generales de industria que anunciaban la inminencia de la huelga general de toda la clase obrera. El problema consistía en que aquella impresionante movilización se encontró, a finales de junio, carente por completo de dirección política. No podía venir esa dirección de la CNT, que siempre abominaba de la política y era, por tanto, completamente ciega para los problemas del poder, pero tampoco podía ahora venir de la UGT, que al romper su vinculación con los órganos dirigentes del PSOE perdió su tradicional referente político.

Se produjo así en el seno de las dos grandes organizaciones obreras una creciente expectativa revolucionaria, a la par que una incapacidad radical para tomar cualquier decisión en ese sentido: la CNT no repetiría ya movimientos insurreccionales, abandonados después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934; la UGT no podía intentar nada similar a un nuevo octubre de 1934 contra un Gobierno de izquierdas. Así, a pesar de la expectativa creciente, un movimiento insurreccional dirigido por los sindicatos estaba más lejos de producirse en junio de 1936 que en varios momentos anteriores. Quedaba el movimiento de huelgas y las condiciones en que sería preciso ponerle fin. Y en torno a este problema se reabrieron las tradicionales distancias entre la CNT y la UGT, partidaria la primera de mantener a ultranza las huelgas declaradas e inclinada la segunda a soluciones negociadas. En julio, los métodos también tradicionales de resolver estas divergencias hicieron su reaparición en Madrid y Málaga, donde varios trabajadores de ambos sindicatos murieron asesinados por sus compañeros de la víspera.

Las pistolas no hicieron su aparición sólo en las disputas sindicales. La escisión que desde finales de 1935 afectaba al movimiento socialista se convirtió, a medida que avanzaba el año 1936, en una lucha interna abocada posiblemente a la formación de dos partidos: uno, estrictamente político, con posiciones cercanas a los republicanos y dirigido por la comisión ejecutiva del PSOE, cuya cabeza visible era Prieto; otro, de base sindical, con una política estrictamente obrera y dirigido por la comisión ejecutiva de la UGT bajo el control de Largo Caballero. Los dirigentes del PSOE perdieron, pues, toda posibilidad de influir en el camino emprendido por los dirigentes de la UGT y, por tanto, perdieron también su tradicional función de puente entre el republicanismo y un sector importante del movimiento obrero.

Esta pérdida de sustancia política del socialismo, añadida a los graves enfrentamientos entre sus dos facciones principales, repercutió sobre el peso político del comunismo. Desde su fundación, el PCE había sido un insignificante grupo político con escasa presencia en la clase obrera. Su incapacidad para penetrar, como intentó, en la CNT o en la UGT y su política de clase contra clase —calificada por sus propios dirigentes de sectaria— lo dejó empantanado durante los primeros cuatro años de República. Sin embargo, a partir de septiembre de 1934, y debido a la nueva dirección política consagrada en 1935 por la Internacional Comunista en su VII Congreso, el PCE buscó la alianza con los socialistas para hacerla luego extensiva a los republicanos. Para 1936, el PCE era ferviente defensor de la política del Frente Popular, a la que pretendía llenar, ante la negativa socialista y la indiferencia republicana, de contenidos programáticos, mientras pugnaba por situar bajo una dirección única a los partidos de izquierda por medio de la constitución de comités de enlace.

Si en esa operación tuvo escaso éxito, lo alcanzó del todo, y con más facilidad de lo previsto, en la unificación de las juventudes, que revistió una importancia excepcional, sobre todo en núcleos urbanos y principalmente en Madrid, por la relevancia política alcanzada por las juventudes en 1933 y 1934. La República, en efecto, significó la politización de los jóvenes, convencidos de que las tensiones de la época anunciaban el fin de un sistema social y abrían la posibilidad, a la vez que planteaban la urgencia, de conquistar el poder para transformar la sociedad. La fascinación ejercida por lo soviético y el atractivo que se desprendía de los símbolos de la conquista por la fuerza —pistolas, uniformes y paradas militares— hicieron el resto.

Los comunistas, dirigidos por cuadros aún jóvenes, aureolados de prestigio internacional, poseedores de certezas más firmes y asesorados y guiados desde 1934 por delegados de la Internacional que mantenían la cabeza fría, supieron dar la vuelta a la atracción que en 1934 ejercían los jóvenes socialistas sobre sus propias filas. Más que el crecimiento de su partido, fue este salto adelante lo que dio al PCE un peso cualitativamente distinto en el seno de la izquierda. Muy determinadas a la acción, las Juventudes Socialistas Unificadas —tal fue su nuevo nombre— no permanecerían inactivas en la lucha callejera que las enfrentó a Falange Española, lanzada ya sin reservas a la provocación y al pistolero.

Dos grandes sindicatos en plena movilización, aunque enfrentados entre sí y carentes ambos de dirección política; un movimiento socialista en trance de escisión; unas juventudes muy combativas que se unifican bajo la dirección comunista: tales eran los desplazamientos que podían detectarse por la izquierda no gubernativa. En condiciones normales, de la primera habría resultado el agotamiento de los movimientos de huelga con tensos retornos al trabajo; de la segunda, quizá la formación de dos partidos; de la tercera, una nueva relación de fuerza dentro de la izquierda obrera entre el PSOE y el PCE. En las condiciones de 1936, y con un Gobierno que dependía parcial pero sustancialmente del apoyo obrero, ese conjunto de factores impidió que el Gobierno pudiera ampliar sus bases y aceleró la degradación de su poder.

DEBILIDAD DE LOS REPUBLICANOS

Por tradición, los partidos republicanos no podían aspirar a buenos resultados electorales ni, por tanto, al Gobierno sin el apoyo del socialismo. Ciertamente, durante los cinco años de República habían crecido notablemente y aclarado y simplificado sus tendencias y organizaciones, con el resultado de la formación de una incipiente nueva clase política nacional. Con todo, faltos del apoyo activo y eficaz del movimiento socialista, los partidos republicanos carecían del único instrumento posible para resolver por medios institucionales las demandas obreras. Sin el PSOE era completamente ilusorio pensar que pudieran encauzar políticamente las reivindicaciones de las clases obrera y campesina.

Lo grave fue, sin embargo, que los partidos republicanos de izquierda se adentraron en una operación política cuya solución final se reveló nefasta para su capacidad de gobierno y para el mismo porvenir de la República. Se trata, claro está, de la destitución de Alcalá Zamora y de su sustitución por Azaña. Que Alcalá Zamora debía abandonar la presidencia de la República era consecuencia política del resultado electoral: había arriesgado la jefatura del Estado en una operación partidista, la magnitud de cuya derrota lo desautorizaba para seguir en el ejercicio de su función. Más que el temor a que disolviese el Parlamento por tercera vez, lo que hizo insostenible su posición fue la pérdida de autoridad derivada de aquella intromisión juzgada intolerable tanto por la izquierda como por la derecha, aunque ésta quizá, en caso de haber triunfado, habría tenido

razones más lógicas para calificar de improcedente la disolución de las Cortes anteriores.

Pero si la primera parte de la operación sustitutoria no ofreció dudas, la segunda no era en absoluto la única posible y seguramente fue la peor por sus resultados. El problema no consistía en destituir a Alcalá Zamora sino en sustituirlo. Como es lógico en semejante circunstancia, se comenzaron a barajar nombres, lo que distrajo la atención política de las graves tensiones a que se enfrentaba la acción de gobierno. Tampoco, como era de esperar, hubo unanimidad a la hora de expresar preferencias: el mejor para unos era el peor para otros; Julián Besteiro, Diego Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román, Álvaro de Albornoz, ninguno valía para todos. Sólo el nombre de Azaña volvió a establecer el acuerdo —en ciertos casos reticente— de toda la izquierda, desde los comunistas a los republicanos pasando por el sector centrista del PSOE. Azaña sería, pues, el designado para ocupar la presidencia.

Que tras sus dudas y cavilaciones aceptara finalmente la designación se ha atribuido a razones que van desde el cansancio —«bulto parlante de un hombre excesivamente fatigado», acababa de decir de sí mismo— hasta el deseo de revancha. Azaña, sin embargo, acostumbraba a actuar en política por razones o motivos políticos que, además, explicitaba por la escritura o el discurso. Es indudable que la operación le produjo «no pequeño placer estético», como escribió a su cuñado, pero si se metió en ella fue porque juzgaba necesario para el porvenir de la República que los socialistas volvieran al gobierno y pensaba que sólo él, entre los dirigentes republicanos, estaba en condiciones de ofrecer a un socialista la presidencia del Consejo de Ministros. Azaña entreveía este destino desde hacía ya algún tiempo, cuando al percibir a mediados de 1935 la «oleada de azañismo» creyó que la única forma de sacarle el máximo rendimiento consistía en no «estrellarlo en la presidencia del Consejo». Si su política, con él a la cabeza, se estrellaba en el Gobierno, era la misma República la que fracasaba. Después de él, y en el caso de que fracasase, no había posibilidad de ningún otro Gobierno republicano porque todas las demás fuerzas políticas con algún poder social, tanto de la izquierda como de la derecha, esperaban ese fracaso para establecer otro sistema político.

De este supuesto dedujo Azaña que era preciso situar al *azañismo* más alto, de modo que fuera posible alternar diversas fórmulas republicanas en la

presidencia del Consejo: que fracasara una de ellas permitiría probar otras. Azaña prefirió, pues, garantizar el futuro a quemar su capital político en el presente. Sin duda hubo en esta elección una percepción equivocada de los peligros reales que amenazaban —no en el futuro, sino en el presente— a la República y que él, excesivamente convencido del poder de su palabra, atribuía al miedo y al pánico de la gente. Pero hubo sobre todo el propósito de posibilitar desde la jefatura del Estado la ampliación hacia los socialistas de las bases, estrictamente republicanas, en que se apoyaba el Gobierno, que comenzaban a ser ya demasiado estrechas. Por eso la primera acción de Azaña como presidente de la República fue llamar a Indalecio Prieto para ofrecerle el encargo de formar Gobierno. Es posible que él mismo juzgara prematura su iniciativa y no insistiera en sacarla adelante, pero no cabe duda de que con su encargo pretendía reforzar, también para el futuro, la posición de Prieto entre el conjunto de la izquierda: el ejemplo, en esta ocasión, era de nuevo Francia, donde Leon Blum, socialista, presidía un gobierno de Frente Popular apoyado parlamentariamente por los comunistas. Para qué esperar, fue la pregunta de Azaña al embajador francés, lamentando la negativa de Prieto a aceptar el encargo.

Porque finalmente la segunda parte de la operación que justificaba su proclamación como presidente de la República quedó sin cumplir: la izquierda socialista se cerró en banda e hizo público un comunicado en el que daba por roto el Frente Popular si se modificaba la composición política del Gobierno, o sea, si Prieto aceptaba la presidencia. Prieto no se atrevió a desafiar a su partido ni a su minoría parlamentaria y prefirió esperar a que la división socialistas se solventase, quizá con la escisión de la izquierda, en el congreso que se estaba preparando para el otoño de ese mismo año. El Gobierno no se amplió e incluso perdió la relativa neutralidad del anarcosindicalismo mientras aumentaban las expectativas de un rápido deterioro abrigadas por la izquierda socialista como antesala de su acceso en solitario al poder. Santiago Casares Quiroga, nuevo presidente del Gobierno, que pudo ser recibido con satisfacción por los republicanos, carecía de autoridad sobre el resto de las izquierdas y fue recibido con hostilidad mezclada al desdén por las derechas.

Con Casares en la presidencia del Consejo, los socialistas en el punto culminante de su lucha interna y los sindicalistas de nuevo en la calle, el

Gobierno perdió su dirección y no pudo imponer ninguna a los acontecimientos. El griterío del Parlamento amplificaba la inquietud que había retornado, más fuerte, a la calle. Azaña, mientras tanto, cuidaba las flores de la Quinta del Pardo, estropeadas por una lluvia persistente, sin saber «apenas nada» de política.

ENORME DESBARAJUSTE DE LAS DERECHAS

La derecha, por su parte, era incapaz de salir de ese «enorme desbarajuste» que en opinión de *La Vanguardia* había producido en su seno el resultado de las elecciones. Achacaba el editorialista esa situación a la «falta de temple y de rumbo seguros en los encargados de recoger velas y retirar ordenadamente las naves». Ocurrió en la derecha durante esos primeros días tras las elecciones lo contrario que en la izquierda: si aquí emergió una figura con autoridad, allí la única que podía tenerla sufrió un desvanecimiento, o sea, que desapareció; que se quitó de en medio. Gil Robles, al fracasar en su empeño de que Portela declarase el estado de guerra se marchó de Madrid, y aunque hubo de regresar enseguida, nunca volvió a recuperar el carisma ni la autoridad de que gozó en febrero.

No los recuperó en sus propias filas. La CEDA era, como casi todas las organizaciones de la República, un conjunto mal articulado de grupos y tendencias. Sus juventudes presumían de ser más fascistas que Falange, y seguramente lo eran, porque al lenguaje, la simbología y la ideología añadían una organización de masas que para sí habría querido José Antonio Primo de Rivera. Pero a la CEDA pertenecía también un sector que podría llamarse socialcatólico y que se situaba, si no en las antípodas, sí a considerable distancia de los primeros.

El hundimiento moral de Gil Robles provocó que esas tendencias se dispararan en direcciones contrarias. Es un lugar común historiográfico —constatado ya en múltiples investigaciones locales— afirmar que los jóvenes de Acción Popular corrieron a engrosar las filas de Falange y que muchos mayores se desplazaron hacia los monárquicos, ambos para preparar unas pistolas cuyos gatillos no sentían ya el freno de las creencias religiosas, sino todo lo contrario: se había llegado a la situación en que los grandes valores —propiedad, patria, familia y religión— debían salvarse si preciso fuera por el uso de la violencia. Se

sabe menos, sin embargo, que Giménez Fernández, en uno de los impulsos que le caracterizaban, obtuvo la mayoría en su grupo parlamentario cuando planteó la necesidad de definirse acerca de Monarquía o República y de democracia o fascismo. Los periódicos hablaron, como era lógico, de la «derrota moral» del jefe de la CEDA cuando se conoció el resultado de esta curiosa votación a favor de la República y de la democracia.

Las fisuras en el interior de la CEDA, además de resultar en pérdida de rumbo y de liderazgo, provocaron el avance de la oposición monárquica, cuyo dirigente más notorio defendió con la pasión que le caracterizaba la única alternativa posible a su entender: abolición del sistema parlamentario, supresión de los partidos políticos e implantación de un régimen corporativo apoyado en la fuerza militar. Calvo Sotelo hizo ante el Parlamento, en varias ocasiones, la apología del fascismo y llegó a confesarse fascista, aunque seguramente se fiaba más, para alcanzar esa meta, de los militares que de una organización de masas. De ahí sus contactos con el Ejército y sus denuncias de la situación de anarquía que legitimaba en su discurso la sublevación militar. No es extraordinario, pues, que los atentados se multiplicasen hasta superar la cifra de 250 víctimas morales, entre las que es preciso a las producidas por la Guardia civil y la de Asalto en sus enfrentamientos con campesinos y obreros.

La derrota electoral de las derechas cerró el camino legal para implantar en España el régimen autoritario y corporativo que defendía el Bloque Nacional. A la vez hizo desaparecer en la confusión la posibilidad de un reagrupamiento de fuerzas bajo la dirección de un partido conservador. Para un creciente sector de las derechas no quedaba más salida que luchar en las calles y llamar a los militares. En el Ejército no había necesidad de provocación ni de llamada exterior para convencer a muchos de sus mandos de la necesidad de intervenir: a los dos intentos de golpe legal de diciembre de 1935 y de febrero de 1936 sucedieron muy pronto las reuniones para planear un golpe que ya en ningún caso podría apoyarse en la autoridad civil. El Ejército español de los años treinta era una organización política que había alcanzado como tal el Gobierno del Estado en fecha aún no lejana. Los militares ocupaban puestos relevantes en la Administración, intervenían en política y tenían a su cargo la custodia y defensa del orden público; estaban además acostumbrados a que se les llamase para suplir las carencias del Estado y de quienes conspiraban contra él. El poder

miraba siempre al Ejército cuando hasta él llegaban ruidos de huelgas y disturbios, y la oposición andaba siempre tras los militares cuando preparaba sus movimientos contra el poder. Así ocurrió en 1917 y así volvió a suceder en 1930..., y en 1932, y en 1934, y en 1935.

Al avanzar la República, el Ejército no se salvó del proceso típico de las organizaciones políticas y sindicales de la época: la aparición de tensiones estrictamente políticas en su seno. En 1936 había militares dispuestos a jugar, como diría Azaña, a los soldaditos con las Juventudes Socialistas y con Falange Española; los había en la Unión Militar Republicana (UMR) y en la Unión Militar Española (UME), y tan militar como quien conspiraba contra la República era quien sacó a morir a Calvo Sotelo. Estas divisiones políticas alcanzaron en el Ejército una virulencia superior a la de otras organizaciones. Para un oficial republicano, en la Unión Militar Española sólo había «rufianes, villanos y canallas», mientras que para los afiliados a ésta sus compañeros de la Unión Militar Republicana rebosaban de «hidrofobia cobarde del rencor», de «vesanía» y de «ambición senil». Como era de temer, comenzaron a hablar las pistolas, incluso por razones ajenas al pleito fundamental que se ventilaba, como fue el caso del honor de un capitán de la UME, que corrió de boca en boca gracias a la vida, al parecer alegre, de su esposa.

Lo importante de esta división fue que con ella se evaporaron las posibilidades de un golpe a lo Primo de Rivera, sostenido por la totalidad de la corporación militar. Cuando los jefes y oficiales que pretendían establecer lo que el general Emilio Mola denominó dictadura militar republicana se decidieran a actuar, tendrían que ocuparse ante todo de liquidar la oposición en el seno del propio Ejército. Era ésa, y no la mejor o peor situación del orden público, la preocupación que les hacía dudar y aguardar todavía unas semanas la aparición del momento oportuno, que llegaría cuando un militar, el teniente Castillo, instructor de milicias socialistas, fue asesinado por pistoleros de Falange y, en revancha, fuerzas de seguridad acompañadas de militantes socialistas secuestraron y asesinaron al dirigente de Renovación Española, el diputado José Calvo Sotelo.

La emoción desatada por estas dos muertes aceleró la ejecución del golpe planeado desde meses antes. Pero, contrariamente a lo esperado, no sería una repetición de lo ocurrido en 1923. Aparte de que la circunstancia política era por

completo diferente —un jefe del Estado que nunca apoyaría una sublevación militar y unas organizaciones políticas y sindicales que le opondrían una resistencia activa— había razones internas a las propias Fuerzas Armadas que explican el fracaso del golpe y su transformación en guerra. La acción de los rebeldes difícilmente podría tener éxito si no conseguía en el curso de su ejecución la ansiada *unidad moral* del Ejército por medio de la represión sin contemplaciones de los militares fieles a la República. Como es bien sabido, las primeras ejecuciones, los primeros *paseos* y tiros en la sien fueron realizados por militares contra militares. Y no contra cualquier militar desconocido, sino contra amigos y familiares de los ejecutores. Tal represión tuvo, entre otros, el resultado de alargar el tiempo del golpe más allá del efecto sorpresa y dar tiempo a otras organizaciones para desarrollar sus propias estrategias. De ellas, las que por su fuerza numérica podían oponer mayor resistencia a la rebelión eran los sindicatos, que vivían desde hacía tiempo en la expectativa de que una provocación de las derechas desencadenaría por sí misma la revolución social. A la guerra siguió, pues, la revolución.

Pero ni la guerra ni la revolución fueron resultados inevitables de la situación por la que atravesaba la República en 1936, sino consecuencias directas del golpe de Estado militar. Una guerra civil era impensable en el verano de 1936 sin esa fragmentación de la corporación militar, pues en ningún sitio, excepto en los cuarteles, había armas que tomar por más que no faltara gente dispuesta a empuñarlas. Cuando un ejército se sitúa en bloque al lado de la legalidad, no hay revolución que triunfe, como ya había visto Engels a finales del siglo XIX; lo contrario también es verdad: cuando un ejército es unánime en su decisión de dar un golpe de Estado, no hay constitución ni pueblo en armas que resista, como para su perdición comprobó el gobierno de Chile en 1973. Lo que abre las puertas a la indeterminación es el golpe faccioso, el perpetrado por una facción del ejército. Pues, por una parte, los golpistas no cuentan con el seguimiento de la totalidad de las fuerzas armadas y habrán de liquidar violentamente como primera providencia a los que mantienen la lealtad constitucional y disponen también de armas; y por otra, la división del ejército deja espacio suficiente para que grupos de civiles muy movilizados asalten depósitos de armas y comiencen a repartirlas entre los afiliados a organizaciones políticas y sindicales, que en momentos de gran movilización saldrán a la calle

para hacer frente a los militares insurrectos. Esto fue lo ocurrido en julio de 1936: por su carácter faccional, el golpe no triunfó en su propósito de hacerse rápidamente con el poder, aunque por contar con amplias complicidades entre la joven oficialidad, no fue derrotado en su propósito de controlar vastos territorios de la península.

Todas las condiciones se acumularon así para que un golpe militar que no triunfa pero que no es derrotado, ejecutado en un momento de movilización obrera y debilidad gubernativa, pusiera en marcha una revolución que, aun si logró ahogarlo en las principales capitales, no fue capaz de derrotarlo en toda la península ni pudo y ni siquiera se propuso hacerse con el control del Estado. Esta acumulación de impotencias se debió más a las divisiones dentro de cada una de las partes en que apareció repartida territorialmente España que a la fuerza del adversario. Ni el ejército fue unánime en su propósito, ni las organizaciones obreras lo fueron en su estrategia ni en sus objetivos. Muchos militares y unidades de las fuerzas de seguridad permanecieron indecisos o fieles a la República: las primeras víctimas fusiladas por los rebeldes fueron sus propios compañeros de armas. Por el lado de los leales, los sindicatos venían empeñados de tiempo atrás en luchas internas por la hegemonía, mientras los partidos -socialista, comunista, republicanos-, aunque integrados en un frente electoral en enero de 1936, no habían podido formar un gobierno de coalición en febrero ni en mayo, tantas eran las diferencias que les separaban. Y así, cuando la rebelión hizo sonar la hora de la revolución, todos supieron qué destruir, a quiénes aniquilar; pero muy pocos sabían qué había que construir, qué recursos y hacia qué objetivos había que emplear la fuerza desatada por el golpe militar.